

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Ecuador

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 7 December 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 7 December 2016

N° 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

Équateur

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 décembre 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 7 décembre 2016

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

**MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK**

No. 4-2-208/2016

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS saluda muy atentamente a la Secretaría de la Organización, en ocasión de informarle que debido a los eventos telúricos del 16 de abril de 2016 y sus posteriores réplicas de gran intensidad, el Gobierno de la República del Ecuador ha declarado el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas y Manabí, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1215, a fin de precautelar y garantizar la seguridad de sus poblaciones por los efectos adversos de este desastre natural.

Al respecto, la MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, tiene el honor de informar que de acuerdo al Artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1215 se han suspendido los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, contenidos en el Artículo 17 numeral 1, así como en el Artículo 12 numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, en apego al Artículo 4 numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicita muy comedidamente a la Secretaría General comunicar de tal suspensión a todos los Estados Partes de este instrumento internacional.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la ocasión para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 5 de diciembre de 2016

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York

Nº 1215

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*;

Que el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño; y, que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras y oportunas;

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que de conformidad con el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo a través del organismo técnico establecido en la ley;

Que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos como órgano rector del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo;

Que de conformidad con la ley de la materia son funciones del organismo técnico, entre otras, articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre: y, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;

Que el día de 16 de abril de 2016 se presentaron eventos telúricos ubicados entre las provincias de Esmeraldas y Manabí, y posteriormente se han presentado réplicas de gran intensidad lo que mantiene la tensión por la situación;

Nº 1215

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Que siendo entendible la intención de los afectados por reanudar su propósito de vida ellos pretenden retomar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física, en las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 y sus réplicas, por lo que es necesario tomar medidas para prevenir esos actos;

Que el Ministro de Coordinación de Seguridad, mediante oficio No. MICS-DM-2016-0769 de 12 de octubre de 2016, solicitó la declaratoria del estado de excepción;

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164 y siguientes de la Constitución de la República: y, 29 y 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

DECRETA:

Artículo 1.- DECLARAR el estado de excepción en las provincias de: Manabí y Esmeraldas por los efectos adversos de este desastre natural.

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional hacia las provincias de: Esmeraldas y Manabí; de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del día 16 de abril de 2016 y sus réplicas;

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, por cuanto algunos ciudadanos pretenden retomar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada.

Artículo 4.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida.

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.

Nº 1215

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la situación de excepción.

Artículo 6.- Este estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en las provincias indicadas.

Artículo 7.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.

Artículo 8.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas que pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles en riesgo, en las provincias de Manabí y Esmeraldas a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.

Artículo 9.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministros de: Coordinación de Seguridad, del Interior, de Defensa, de Finanzas, de Salud, de Inclusión Económica y Social; y la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Dado en Quito, a 14 de octubre de 2016



Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

[TRANSLATION – TRADUCTION]

No. 4-2-208/2016

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the United Nations Secretariat and has the honour to inform it that owing to the seismic events of 16 April 2016 and strong aftershocks, the Government of the Republic of Ecuador has declared a state of emergency in the provinces of Esmeraldas and Manabí, by Executive Decree No. 1215, in order to protect their populations from the adverse effects of that natural disaster and ensure their safety.

In that regard, the Permanent Mission of Ecuador to the United Nations has the honour to inform the Secretariat that, in accordance with article 3 of Executive Decree No. 1215, the rights relating to inviolability of the home and freedom of movement of those affected by the 16 April 2016 earthquake and its aftershocks in the provinces of Manabí and Esmeraldas, recognized in article 17, paragraph 1, and article 12, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights, have been suspended.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations respectfully requests, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, that the United Nations Secretariat inform all States parties to the Covenant of this measure.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 5 December 2016

No. 1215

Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

Whereas:

Article 14 of the Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the right of the population to live in a healthy and ecologically balanced environment that guarantees sustainability and good living (*buen vivir/sumak kawsay*);

Article 396 of the Constitution of the Republic of Ecuador provides that the State shall adopt timely policies and measures to avoid adverse environmental impacts where there is certainty of harm; and, that, in case of doubt as to the environmental impact stemming from a deed or omission, even where there is no scientific evidence of harm, the State shall adopt timely protective measures;

Article 389 of the Constitution of the Republic of Ecuador provides that the State shall protect persons, communities and nature from the adverse effects of natural or man-made disasters through risk prevention, disaster mitigation, and the restoration and improvement of social, economic and environmental conditions with the aim of minimizing the condition of vulnerability;

Under article 389 of the Constitution of the Republic of Ecuador, the State shall exercise governance over the national decentralized system for risk management through the technical body established by law;

The Public and State Security Act establishes the National Risk Management Secretariat as the governing body of the national decentralized system for risk management;

In accordance with the relevant law, the technical body shall, among other functions, provide a liaison between institutions in order for them to coordinate actions to prevent and mitigate risk, as well as to address risk and restore or improve upon the conditions that existed prior to the occurrence of an emergency or disaster, and carry out and coordinate the necessary actions to reduce vulnerabilities and to prevent, mitigate, respond to and overcome the adverse effects of disasters or emergencies in the national territory;

Seismic events occurred on 16 April 2016 in the provinces of Esmeraldas and Manabí, followed by strong aftershocks, which has prolonged the tension caused by the situation;

As the affected persons, understandably anxious to resume their normal lives, are attempting to return to their homes in buildings where their lives or physical integrity are at risk in the areas affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks, it is therefore necessary to take measures to prevent such acts;

The Minister of Security Coordination, in note No. MICS-DM-2016-0769 of 12 October 2016, requested the declaration of a state of emergency;

In exercise of the powers conferred on him by articles 164 et seq. of the Constitution of the Republic, and articles 29 and 36 et seq. of the Public and State Security Act,

Decrees:

Article 1. – The state of emergency is hereby declared in the provinces of Manabí and Esmeraldas on account of the adverse effects of this natural disaster.

Article 2. – Provision shall be made for national mobilization in the provinces of Esmeraldas and Manabí; accordingly, all entities of the Central and Institutional Public Administration, and in particular the Armed Forces, the National Police and the autonomous governments of the provinces affected, shall coordinate their efforts to take all necessary and indispensable action to prevent and mitigate risks and to address, remedy and redress the adverse conditions caused by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks.

Article 3. – The rights to inviolability of the home and freedom of movement of persons affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks in the provinces of Manabí and Esmeraldas are suspended, as some citizens are attempting to return to their homes in buildings where their lives or physical integrity are at risk. The Minister of Security Coordination shall determine the manner in which this measure shall be applied in order to achieve the aforementioned aim.

Article 4. – Such requisitions as are necessary to address the emergency shall be issued. Requisitions shall be issued in cases of extreme necessity and in strict compliance with the laws applicable in such situations.

Article 5. – The Ministry of Finance shall allocate sufficient funds to address the state of emergency.

Article 6. – The state of emergency shall remain in effect for sixty days from the signing of this Executive Decree. The territorial scope of application shall be the aforementioned provinces.

Article 7. – The National Assembly and the Constitutional Court shall be apprised of the declaration of the state of emergency.

Article 8. – The United Nations and the Organization of American States shall be apprised of the suspension of the rights to inviolability of the home and freedom of movement of the persons affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks who are attempting to return to their homes in buildings at risk, in the provinces of Manabí and Esmeraldas.

Article 9. – Implementation of this Executive Decree, which enters into force as of its date of issue, without prejudice to its publication in the Official Gazette, shall be the responsibility of the Minister of Security Coordination, the Minister of the Interior, the Minister of Defence, the Minister of Finance, the Minister of Health, the Minister for Economic and Social Inclusion and the National Risk Management Secretariat.

DONE in Quito, on 14 October 2016.

(Signed) Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

N° 4-2-208/2016

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation et a l'honneur de l'informer qu'en raison du séisme survenu le 16 avril 2016 et de ses répliques consécutives de forte intensité, le Gouvernement équatorien a déclaré l'état d'exception dans les provinces d'Esmeraldas et de Manabí par le décret n° 1215 afin de protéger la population des effets néfastes de cette catastrophe naturelle et d'en assurer la sécurité.

À cet égard, la Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies tient à informer le Secrétariat de l'Organisation que, conformément à l'article 3 du décret n° 1215, l'exercice du droit à l'inviolabilité du domicile et du droit de circuler librement, consacrés au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est suspendu pour les personnes touchées par le séisme du 16 avril 2016 et par ses répliques survenus dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies, en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, prie le Secrétariat de l'Organisation de bien vouloir faire part de cette mesure à tous les États parties à cet instrument international.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 5 décembre 2016

N° 1215

Rafael Correa Delgado
Président de la République

Considérant :

Que l'article 14 de la Constitution de la République de l'Équateur reconnaît le droit de la population de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, garantissant la durabilité et le bien-être, ou *sumak kawsay* ;

Que l'article 396 de la Constitution de la République de l'Équateur prévoit que l'État adopte, lorsqu'il y a un risque avéré de dégâts, des politiques et des mesures propres à prévenir les effets environnementaux néfastes; et, qu'en cas de doute quant à l'incidence d'une action ou d'une omission sur l'environnement, l'État prendra des mesures de protection et toute autre mesure qu'il jugera utile, même en l'absence de preuves scientifiques de dégâts ;

Que l'article 389 de la Constitution de la République de l'Équateur dispose que l'État a le devoir de protéger les personnes, les collectivités et la nature des effets néfastes des catastrophes d'origine naturelle ou humaine par la prévention des risques, l'atténuation des effets des catastrophes, le relèvement et l'amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales, le but étant d'atténuer l'état de vulnérabilité ;

Que, conformément à l'article 389 de la Constitution de la République de l'Équateur, l'État assume la direction du système national décentralisé de gestion des risques par l'intermédiaire de l'organisme technique établi par la loi ;

Que par la loi sur la sécurité publique et nationale, le Secrétariat national de gestion des risques a été désigné comme organe directeur du système national décentralisé de gestion des risques ;

Que, conformément à la loi en vigueur en la matière, l'organisme technique est chargé notamment de réunir les institutions pour qu'elles coordonnent leurs actions destinées à prévenir et à atténuer les risques et à y faire face, ainsi qu'à améliorer les conditions et à rétablir celles qui prévalaient avant la catastrophe ou la situation d'urgence, et que ledit organisme est en outre chargé de réaliser et de coordonner les actions voulues pour réduire la vulnérabilité, pour prévenir et atténuer les éventuels effets néfastes des catastrophes ou des situations d'urgence sur le territoire national et pour se relever ;

Qu'en date du 16 avril 2016, un séisme a frappé les provinces d'Esmeraldas et de Manabí et des répliques de grande intensité s'en sont suivies, ce qui explique la gravité persistante de la situation ;

Qu'alors que les sinistrés, souhaitant légitimement reprendre une vie normale, cherchent à regagner leur foyer situé dans des immeubles représentant un danger pour leur vie ou leur intégrité physique dans les zones touchées par le séisme du 16 avril 2016 et par ses répliques, il est nécessaire de prendre des mesures pour empêcher ces actes ;

Que le Ministre de la coordination de la sécurité, dans sa communication officielle n° MICS-DM-2016-0769, en date du 12 octobre 2016, demande que soit décrété l'état d'exception ;

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 164 et suivants de la Constitution de la République et par les articles 29, 36 et suivants de la loi sur la sécurité publique et nationale,

Décète :

Article premier. L'état d'exception est déclaré dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas en raison des effets néfastes de la catastrophe naturelle qui y est survenue.

Article 2. Une mobilisation nationale a lieu pour les provinces d'Esmeraldas et de Manabí, de sorte que toutes les entités de l'administration publique centrale et institutionnelle, en particulier les forces armées, la police nationale et les gouvernements autonomes décentralisés des provinces concernées coordonnent leurs efforts afin de mettre en œuvre les actions indispensables pour réduire et prévenir les risques, ainsi que pour faire face et remédier aux conditions défavorables résultant du séisme du 16 avril 2016 et de ses répliques.

Article 3. L'exercice des droits à l'inviolabilité du domicile et de la liberté de circulation est suspendu pour les personnes ayant été touchées par le séisme et ses répliques qui ont frappé les provinces de Manabí et d'Esmeraldas le 16 avril 2016, car certains citoyens cherchent à regagner leur foyer situé dans des immeubles qui représentent un danger pour leur vie ou leur intégrité physique. Le Ministère de la coordination de la sécurité définira les modalités d'application de cette mesure pour atteindre l'objectif visé.

Article 4. Les réquisitions appropriées seront ordonnées pour répondre à l'urgence. Des réquisitions seront prises en cas d'extrême nécessité et dans le strict respect du régime juridique applicable à cette situation.

Article 5. Le Ministère des finances met à disposition des ressources suffisantes aux fins de la bonne application de l'état d'exception.

Article 6. L'état d'exception est déclaré pour une durée de soixante jours à partir de la signature du présent décret. Le champ d'application territorial couvre les provinces susmentionnées.

Article 7. L'instauration de l'état d'exception sera communiquée à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle.

Article 8. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains seront informées de la suspension de l'exercice du droit à l'inviolabilité du domicile et du droit de circuler librement des personnes ayant été touchées par le séisme du 16 avril 2016 et par ses répliques qui cherchent à regagner leur foyer situé dans des immeubles à risque dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas.

Article 9. Les Ministres de la coordination de la sécurité, de l'intérieur, de la défense, des finances, de la santé et de l'intégration économique et sociale, ainsi que le Secrétariat national de gestion des risques, sont responsables de l'application du présent décret, qui entrera en vigueur à partir de la date de sa délivrance, sans préjudice de sa publication dans le Registre officiel.

Fait à Quito, le 14 octobre 2016.

(signé) Rafael Correa Delgado
Président de la République

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

France

*Notification deposited with the
Secretary-General of the United Nations:
21 December 2016*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
21 December 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

France

*Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 décembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 21 décembre 2016*

[TEXT IN FRENCH – TEXTE EN FRANÇAIS]

« FD/N° 2016 920396

New York, le 21 décembre 2016

Monsieur le Secrétaire général,

Par lettre du 23 novembre 2015, je portais à votre connaissance la déclaration de l'état d'urgence en France à la suite des attentats coordonnés ayant frappé Paris le 13 novembre 2015 et vous priais de bien vouloir considérer que ma lettre constituait une information au titre de l'article 4 du Pacte.

En effet, le Gouvernement français a décidé, par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, de faire application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

La gravité des attentats, leur caractère simultané et la permanence de la menace à un niveau inédit sur le territoire national ont ensuite justifié la prorogation de l'état d'urgence, dont je vous ai informé, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015 par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 puis pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016, puis pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 et enfin pour une durée de 6 mois à compter du 22 juillet 2016 par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.

La menace terroriste, caractérisant « un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public », qui a justifié la déclaration initiale de l'état d'urgence et ses prorogations, demeure à un niveau très alarmant qui nécessite de pouvoir disposer de mesures administratives renforcées en vue de lutter contre le terrorisme sur le territoire national.

Ainsi, douze tentatives d'attentats ont été déjouées depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, parmi lesquelles, à la fin du mois de novembre, un projet d'attentat de grande ampleur commandité à partir du territoire syrien.

Cette menace très élevée s'inscrit désormais dans un contexte préélectoral caractérisé par de nombreuses réunions publiques, contexte susceptible d'être exploité par les organisations terroristes ou par des individus inspirés par elles en raison des cibles que représentent ces rassemblements autant que de l'importance de ce moment dans la vie démocratique de la Nation.

Le bilan des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015 a confirmé la nécessité de ces mesures pour prévenir d'autres attentats et désorganiser les filières terroristes.

Si les dispositions législatives et réglementaires adoptées ces derniers mois ont, en plus des moyens matériels et humains supplémentaires, considérablement renforcé les outils juridiques permettant de lutter contre le terrorisme, comme le démontrent les résultats obtenus dans cette lutte, les mesures permises dans le cadre de l'état d'urgence restent indispensables pour faire face à l'état de la menace et sont davantage complémentaires que concurrentes des mesures de droit commun.

C'est pourquoi l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017.

Parmi les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre de l'état d'urgence, les perquisitions administratives (I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence) seront autorisées jusqu'au 15 juillet 2017. En outre, la loi de prorogation prévoit que la durée des assignations à résidence sera limitée à douze mois. Au-delà, le ministre de l'intérieur pourra demander au juge l'autorisation de prolonger l'assignation à résidence pour une durée de trois mois s'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé continue à constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Le Gouvernement français tient à rappeler que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sont soumises à un contrôle juridictionnel effectif ainsi qu'à un mécanisme de suivi et de contrôle particulièrement attentif du Parlement. Enfin, le Gouvernement français veille à une bonne information et concertation avec les élus locaux et entend poursuivre le dialogue avec la société civile.

Le texte de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 est joint à la présente lettre.

Je vous prie, Monsieur le Secrétaire général, d'agréer l'assurance de ma haute considération.

(Signé) François Delattre

Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ⁽¹⁾
NOR: INTX1633947L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

- I. – Est prorogé, à compter du 22 décembre 2016, jusqu'au 15 juillet 2017 l'état d'urgence :
- déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
 - et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
- II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
- III. – Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 2

I. – L'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

- « La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets.
- « A compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
- « Le ministre de l'intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d'Etat l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l'échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments produits par l'autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. L'autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l'assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.
- « La demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

II. – Par dérogation aux quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, a été assignée à résidence plus de douze mois sur le fondement de l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 peut faire l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation s'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette nouvelle assignation ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans ce délai, s'il souhaite prolonger l'assignation à résidence, le ministre de l'intérieur peut saisir le Conseil d'Etat sur le fondement des quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée.

Article 3

A l'article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, les mots : « n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ».

Article 4

Pendant la période de prorogation prévue à l'article 1er de la présente loi, l'article 4 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence n'est pas applicable en cas de démission du Gouvernement consécutive à l'élection du Président de la République ou à celle des députés à l'Assemblée nationale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux

La ministre des outre-mer,
Ericka Barcigts

⁽¹⁾ *Travaux préparatoires* : loi n° 2016-1767.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4295 ;

Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission des lois, n° 4298 ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 décembre 2016 (TA n° 858).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 215 (2016-2017) ;

Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des lois, n° 220 (2016-2017) ;

Texte de la commission n° 221 (2016-2017) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 2016 (TA n° 37, 2016-2017). »

[TRANSLATION – TRADUCTION]

FD/No. 2016 920396

New York, 21 December 2016

Sir,

In a letter dated 23 November 2015, I brought to your attention the declaration of a state of emergency in France following coordinated attacks in Paris on 13 November 2015 and requested you to consider my letter a notification for the purposes of article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The French Government, by Decree No. 2015-1475 of 14 November 2015, decided to implement Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency.

The seriousness of the attacks, their simultaneous nature and the ongoing unprecedented threat within our borders then necessitated an extension of the state of emergency, of which I informed you: for a period of three months, with effect from 26 November 2015 (by Act No. 2015-1501 of 20 November 2015); then for a further three months, with effect from 26 February 2016 (by Act No. 2016-162 of 19 February 2016); then for a further two months, with effect from 26 May 2016 (by Act No. 2016-629 of 20 May 2016); and finally for a period of six months, with effect from 22 July 2016 (by Act No. 2016-987 of 21 July 2016).

The terrorist threat, representing “an imminent danger arising from serious breaches of public order”, which constituted the reason for the initial declaration and extensions of the state of emergency, remains at a highly alarming level, making it necessary to have strengthened administrative measures in place to combat terrorism within our borders.

Twelve attempted attacks have been thwarted since the attack in Nice on 14 July 2016, including, in late November, a major attack masterminded from within the Syrian territory.

This very high threat is now taking place in a pre-electoral context involving numerous public gatherings, which could be exploited by terrorist organizations or by individuals inspired by them, because of the targets that these gatherings represent, as well as the importance of this period in the democratic life of the Nation.

Assessment of the measures taken since 14 November 2015 in the context of the state of emergency has confirmed the need for such measures to prevent further attacks and to disrupt terrorist networks.

The legislative and regulatory provisions adopted in recent months have, in addition to providing further human and material resources, significantly strengthened the legal tools to combat terrorism, as demonstrated by the results of these efforts. However, the measures permitted under the state of emergency remain indispensable to address the threat and are complementary to, rather than competing with, those of general law.

For this reason the state of emergency was extended by Act No. 2016-1767 of 19 December 2016, extending the application of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency until 15 July 2017.

Measures that could be taken in the context of the state of emergency include warrantless searches (article 11, section I, of the Act of 3 April 1955 concerning the state of emergency), which shall be authorized until 15 July 2017. In addition, the Act of extension provides that the duration of house arrests shall be limited to 12 months. Beyond that, the Minister of the Interior may request a judge's authorization to extend the house arrest for a period of three months if there are serious reasons to believe that the behaviour of the person in question continues to pose a threat to public security and public order.

The French Government wishes to recall that the measures taken in the context of the state of emergency are subject to effective judicial monitoring as well as to particularly close oversight and monitoring by Parliamentary machinery. Lastly, the French Government ensures that local elected officials are consulted and kept fully informed and intends to continue its dialogue with civil society.

The text of Act No. 2016-1767 of 19 December 2016 is appended herewith.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) François Delattre

Act No. 2016-1767 of 19 December 2016 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency ⁽¹⁾

NOR: INTX1633947L

The National Assembly and the Senate have adopted,
The President of the Republic promulgates the following Act:

Article 1

I. - The state of emergency that was declared by Decree No. 2015-1475 of 14 November 2015 implementing Act No. 55-385 of 3 April 1955 and Decree No. 2015-1493 of 18 November 2015 implementing Act No. 55-385 of 3 April 1955; and most recently extended by Act No. 2016-987 of 21 July 2016 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955, concerning the state of emergency and measures to strengthen counter-terrorism, is extended, with effect from 22 December 2016, until 15 July 2017.

II. - While it remains in force, the state of emergency shall trigger the application of article 11, section I, of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency.

III. - The state of emergency may be terminated by decree of the Council of Ministers before the expiry of the extension period. In this case, Parliament shall be so informed.

Article 2

I. - Article 6 of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency shall be supplemented by the following four paragraphs:

“The decision to place a person under house arrest shall be renewed after a period of extension of the state of emergency in order to continue to be in force.

From the declaration of a state of emergency and during the entire time that it is in effect, the same person may not be placed under house arrest for a total of more than twelve months.

The Minister of the Interior may, however, request authorization from the judge-in-chambers of the Council of State to extend house arrest beyond the period mentioned in the twelfth paragraph. The request shall be submitted no earlier than fifteen days prior to the expiry of this period. The judge shall issue a ruling in the manner provided for in book V of the Code of Administrative Justice and within 48 hours of its submission, on the basis of evidence produced by the administrative authority supporting serious grounds to believe that the person’s behaviour continues to pose a threat to public security and public order. An extension authorized by the judge may not exceed three months. The administrative authority may, at any time, terminate the house arrest or reduce its associated obligations in accordance with the provisions of this article.

The request mentioned in the penultimate paragraph may be renewed under the same conditions.”

II. - Notwithstanding the last four sections of article 6 of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency, any person who, within ninety days of the entry into force of this Act, has been placed under house arrest for more than 12 months on the basis of a state of emergency declared by Decree No. 2015-1475 of 14 November 2015 implementing Act No. 55-385 of 3 April 1955 and Decree No. 2015-1493 of 18 November 2015 implementing Act No. 55-385 of 3 April 1955 overseas, may be subject to a new house arrest measure if there are serious reasons to believe that the person’s behaviour

poses a threat to public security and public order. The new period of house arrest may not exceed 90 days. During this period, if he wishes to extend the house arrest, the Minister of the Interior may bring the matter before the Council of State on the basis of the last four sections of article 6 of Act No. 55-385 of 3 April 1955 above.

Article 3

In article 15 of Act No. 55-385 of 3 April 1955 on the state of emergency, the words: “No. 2016-987 of 21 July 2016 extending the implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency and measures to strengthen counter-terrorism” are replaced by the words, “No. 2016-1767 of 19 December 2016 extending the implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency.”

Article 4

During the extension period provided for in article 1 of this Act, article 4 of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency is not applicable in the event of the resignation of the Government following election of the President of the Republic or of members of the National Assembly.

This Act shall be executed as a law of the State.

Done at Paris, 19 December 2016.

François Hollande

By the President of the Republic:

Bernard Cazeneuve
Prime Minister,

Jean-Jacques Urvoas
Keeper of the Seals and Minister of Justice

Bruno Le Roux
Minister of the Interior

Minister for Overseas Territories
Ericka Bareigts

⁽¹⁾ *Preparatory work:* Act No. 2016-1767.

National Assembly:

Bill No. 4295;

Report No. 4298 by Mr. Pascal Popelin, on behalf of the Law Commission;

Discussion and adoption, following application of the accelerated procedure, on 13 December 2016 (TA No. 858).

Senate:

Bill No. 215 (2016-2017), adopted by the National Assembly;

Report No. 220 (2016-2017) by Mr. Michel Mercier, on behalf of the Law Commission;

Commission text No. 221 (2016-2017);

Discussion and adoption on 15 December 2016 (TA No. 37, 2016-2017).

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

*Notification deposited with the
Secretary-General of the United Nations:
21 December 2016*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
21 December 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Pérou

*Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 décembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 21 décembre 2016*

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

7-1-SG/ 02

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos- y, en alcance a la nota 7-1-SG/106 del 21 de diciembre de 2016, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 4º del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, así como del Artículo 27º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene a honra informar que mediante Decreto Supremo No. 088-2016-PCM, publicado el 29 de noviembre de 2016, cuya copia se acompaña, se declara por treinta (30) días, a partir de la fecha antes indicada, el Estado de Emergencia en la provincia de San Román del departamento de Puno.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 (f) del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 9º, 12º, 17º y 21º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, con el motivo de consolidar la pacificación de la zona y del país.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas hace propicia la oportunidad para reiterar a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos- las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 6 de enero de 2017

**DECRETO SUPREMO
N° 088-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, habiéndose producido actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población en la provincia de San Román del departamento de Puno, resulta necesario adoptar las medidas constitucionalmente previstas para restablecer el orden interno;

Que, mediante Informe N° 162-2016-DIRNOP-REGPOLPUNO, de fecha 29 de noviembre de 2016, la Región Policial Puno de la Policía Nacional del Perú, solicita se declare el Estado de Emergencia en la provincia de San Román del departamento de Puno, a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia ante los altos índices de inseguridad ciudadana;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1°.- Declaración de Estado de Emergencia

Declarar por el término de treinta (30) días calendario el Estado de Emergencia en la provincia de San Román del departamento de Puno. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2°.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho de la
Presidencia de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARIANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in reference to note No. 7-1-SG/106 of 21 December 2016¹, in accordance with article 4 of the [International] Covenant on Civil and Political Rights and article 27 of the American Convention on Human Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 088-2016-PCM, issued on 29 November 2016 (copy attached), a state of emergency is declared for thirty (30) days, in the Province of San Román, Department of Puno, with effect from the aforementioned date.

During the state of emergency, the constitutional rights to liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, and in articles 9, 12, 17 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, will be suspended in order to consolidate peace in the area and in the country as a whole.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 6 January 2017

Declaration of a state of emergency in the Province of San Román, Department of Puno

Supreme Decree No. 088-2016-PCM

The President of the Republic,

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of human rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the Nation;

That, furthermore, article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, decree the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration in all or part of the national territory, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or public order, a disaster or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory may be restricted or suspended;

That, in view of the occurrence of events that have disrupted public order and affected the normal conduct of the population's activities in the Province of San Román, Department of Puno, it is necessary to adopt the measures envisaged in the Constitution to for the restoration of public order;

That by note No. 162-2016-DIRNOP-REGPOLPUNO of 29 November 2016, the Puno Regional Police District of the National Police of Peru has requested the declaration of a state of emergency in the Province of San Román, Department of Puno, to strengthen the fight against crime, given the high levels of public insecurity;

In accordance with the provisions of article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, paragraphs 2 (b) and (d), of Act No. 29158, Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1. Declaration of state of emergency

A state of emergency is hereby declared for a period of thirty (30) calendar days in the Province of San Román, Department of Puno. The National Police of Peru shall maintain public order with the support of the armed forces.

Article 2. Suspension of constitutional rights

During the state of emergency referred to in the previous article and in the location described in the same article, the constitutional rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, and freedom of assembly and movement in the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3. Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of the Interior, the Minister of Defence and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 29 November 2016.

Martín Alberto Vizcarra Cornejo
First Vice-President of the Republic,
in charge of the Office of the President of the Republic

Fernando Zavala Lombardi
President of the Council of Ministers

Mariano González Fernández
Minister of Defence

Carlos Basombrio Iglesias
Minister of the Interior

María Soledad Pérez Tello
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en référence à la note verbale no 7-1-SG/106 du 21 décembre 2016¹, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de l'article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, a l'honneur de l'informer que aux termes du décret suprême n° 088-2016-PCM, publié le 29 novembre 2016 et dont le texte est joint à la présente, est déclaré l'état d'urgence pour une durée de trente (30) jours à partir de la date susmentionnée, dans la province de San Román du département de Puno.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 6 janvier 2017

Déclaration de l'état d'urgence dans la province de San Román du département de Puno

Décret suprême N° 088-2016-PCM

Le Président de la République

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation;

Que l'article 137 de la Constitution dispose que le Président de la République peut décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et a l'obligation d'en informer le Congrès ou la Commission permanente, pour une durée déterminée, sur la totalité ou sur une partie du territoire national, les régimes d'exception y visés, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre public, de catastrophes ou de situation grave troublant la vie de la nation, durant lequel peut être restreint ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile, et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire;

Que, au vu des événements qui sont venus perturber l'ordre public et le déroulement normal des activités de la population de la province de San Román du département de Puno, il est nécessaire d'adopter les mesures prévues par la Constitution pour rétablir l'ordre public;

Que, par la communication N° 162-2016-DIRNOP-REGPOLPUNO, datée du 29 novembre 2016, la Police nationale péruvienne (région Puno) sollicite la déclaration de l'état d'urgence dans la province de San Román du département de Puno, afin de renforcer la lutte contre la délinquance face aux indices élevés d'insécurité;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 et au paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi n° 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif);

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé;

Décète :

Article premier - Déclaration de l'état d'urgence

Est déclaré pour une durée de trente (30) jours calendaires, l'état d'urgence dans la province de San Román du département de Puno. La Police nationale péruvienne maintiendra l'ordre public avec l'aide des forces armées.

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article précédent et dans la circonscription y visée, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 – Contresigning

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, par le Ministre de l'intérieur, par le Ministre de la défense et par la Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-neuf novembre deux mille seize.

Le premier Vice-président de la République,
chargé du cabinet de la Présidence de la République
Martín Alberto Vizcarra Cornejo

Le Président du Conseil des ministres
Fernando Zavala Lombardi

Le Ministre de la défense
Mariano González Fernández

Le Ministre de l'intérieur
Carlos Basombrio Iglesias

La Ministre de la justice et des droits de l'homme
María Soledad Pérez Tello

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

*Notification deposited with the
Secretary-General of the United Nations:
27 December 2016*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
27 December 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Pérou

*Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 27 décembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 27 décembre 2016*

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

7-1-SG/105

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos- y, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4o. del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, así como del Artículo 27º. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene a honra informar que mediante Decreto Supremo No. 091-2016-PCM, publicado el 8 de diciembre de 2016, cuya copia se acompaña, se prorroga por sesenta (60) días, a partir del 10 de diciembre de 2016, el Estado de Emergencia en diversos distritos de las provincias de Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho; de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; y de las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo del departamento de Junín.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24 (f) del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas hace propicia la oportunidad para reiterar a la Secretaría General de las Naciones Unidas - Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos- las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 21 de diciembre, 2016

Prorrogan Estado de Emergencia en diversos distritos de las provincias de Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho; de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica, de la provincia de La Convención del departamento del Cusco y de las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo del departamento de Junín

**DECRETO SUPREMO
N° 091-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 076-2016-PCM publicado el 6 de octubre de 2016, se declaró por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 11 de octubre de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chunqui, Oroncco, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuy de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Saicabamba, Saicahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, estando por vencer el plazo de vigencia del Estado de Emergencia, referido en el considerando precedente, y de acuerdo a lo manifestado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mediante el Oficio N° 1222 JCCFFAA/SG de fecha 16 de noviembre de 2016, aún subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y distritos indicados; por lo que es necesario prorrogar el mismo, a fin que la presencia de las Fuerzas Armadas, con su acertado accionar, permita que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidación de la pacificación de la zona y del país;

Que, el numeral 1) del artículo 137° de la Constitución Política del Perú, establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; así como que en Estado de Emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, estableciendo en su artículo 4° que la intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad se realiza dentro del territorio nacional con la finalidad de hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, previa declaración del Estado de Emergencia, cuando las fuerzas Armadas asumen el control del orden interno;

Que, el artículo 12° del referido Decreto Legislativo N° 1095, establece que durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas designa el comando operacional para el control del orden interno, con la participación de la Policía Nacional del Perú, la que previa coordinación cumple las disposiciones que dicte el Comando Operacional;

Que, conforme al artículo 3° de la norma acotada, se considera grupo hostil a la pluralidad de individuos en el territorio nacional, que reúne las tres condiciones: (i) están mínimamente organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada y por medio de armas de fuego; y (iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización;

Que, en ese orden de ideas, se precisa que la actuación de los remanentes terroristas, constituyen un grupo hostil, toda vez que reúnen las condiciones antes señaladas;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13° de la norma en mención, establece que el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra un grupo hostil durante el Estado de Emergencia, se sujeta a las reglas de enfrentamiento, ejecutándose las operaciones de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario;

Que, el numeral 4.14 del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1138, Decreto Legislativo del Comando

Conjunto de las Fuerzas Armadas, dispone que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene entre sus funciones, asumir el Comando Único de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando el Presidente de la República declare el estado de emergencia con el control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas; dispositivo reglamentado por el Decreto Supremo N° 007-2016-DE, de fecha 18 de julio de 2016;

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2013-DE de fecha 21 de junio de 2013, precisa los alcances de Comando en acciones u operaciones militares en zonas declaradas en Estado de Emergencia, en los casos en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, disponiendo que la planificación, organización, dirección y conducción de las acciones u operaciones militares serán ejecutadas bajo un Comando Unificado, a cargo del respectivo Comando Operacional de las Fuerzas Armadas;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

DECRETA:

Artículo 1°.- Prórroga de Estado de Emergencia

Prorrogar por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 10 de diciembre de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcátán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Artículo 2°.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3°.- Control del Orden Interno

Disponer que las Fuerzas Armadas asuma el control del Orden Interno, en tanto dure el Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

La Policía Nacional del Perú apoya a las Fuerzas Armadas para el logro de dicho objetivo en los distritos declarados en Estado de Emergencia.

Artículo 4°.- De la intervención de las Fuerzas Armadas

La actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las normas del Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1095.

Artículo 5°.- Comando Unificado

Disponer que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en los distritos indicados en el artículo 1° del presente Decreto Supremo, conforme a

lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como en el Decreto Supremo N° 004-2013-DE, que precisa los alcances del Comando en acciones y operaciones militares en zonas declaradas en Estado de Emergencia, en los casos en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.

Artículo 6°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRO IGLESIAS
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, 21 December 2016

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the [International] Covenant on Civil and Political Rights and article 27 of the American Convention on Human Rights, has the honour to inform you that, by Supreme Decree No. 091-2016-PCM, issued on 8 December 2016 (copy attached), the state of emergency declared in various districts of the Provinces of Huanta and La Mar, Department of Ayacucho; the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Province of La Convención, Department of Cusco, and in the Provinces of Satipo, Concepción and Huancayo, Department of Junín, has been extended for sixty (60) days, with effect from 10 December 2016.

During the state of emergency, the constitutional rights relating to liberty and security of person, the inviolability of the home and freedom of assembly and movement within the territory recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, the renewed assurances of its highest consideration.

Extension of the state of emergency in various districts of the Provinces of Huanta and La Mar, Department of Ayacucho; in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Province of La Convención, Department of Cusco and in the Provinces of Satipo, Concepción and Huancayo, Department of Junín

Supreme Decree No. 091-2016-PCM

The President of the Republic

Considering:

That, by Supreme Decree No. 076-2016-PCM, issued on 6 October 2016, a state of emergency was declared for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 11 October 2016, in the districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, LLochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa, in the Province of Huanta; in the districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchihuay, in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma and Andaymarca, in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the districts of Echarate, Megantoni Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen, Province of La Convención, Department of Cusco; in the districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Rio Tambo, in the Province of Satipo; in the districts of Andamarca and Comas, Province of Concepción; and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca, Province of Huancayo, Department of Junín;

That while the state of emergency referred to in the preceding paragraph is about to expire, the Chief of the Joint Command of the Armed Forces has reported in Note No. 1222 JCCFFAA/SG of 16 November 2016, that the circumstances that gave rise to the declaration of a state of emergency in the above-mentioned provinces and districts still prevail, and that it is therefore necessary to extend the state of emergency, in order to enable the population, through the presence and appropriate action of the armed forces, to identify with the ends or objectives sought by the national Government, namely the consolidation of peace in the area and in the country as a whole;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new supreme decree and that, if the President of the Republic so orders, the armed forces shall maintain public order during a state of emergency;

That Legislative Decree No. 1095 establishes the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory, since article 4 thereof provides that the action of the armed forces in defence of the rule of law and to protect society shall be conducted within the national territory with the aim of resisting a hostile group carrying out military operations, subject to the declaration of a state of emergency, when the armed forces are in charge of maintaining public order;

That article 12 of the above-mentioned Legislative Decree No. 1095 establishes that throughout the state of emergency the Joint Command of the Armed Forces shall appoint the operational command responsible for maintaining public order, with the participation of the National Police of Peru which, after coordination, shall carry out the measures ordered by the Operational Command;

That, in accordance with article 3 thereof, hostile groups are defined as a plurality of individuals in the national territory who meet three conditions (i) have a minimum degree of organization; (ii) have the capacity and intention of confronting the State in a prolonged manner by means of firearms; and (iii) participate in hostilities or collaborate in their realization;

That, accordingly, the conduct of the remaining terrorists means that they constitute a hostile group in that they meet the aforementioned conditions;

That furthermore article 13, paragraph 13.2 of the aforementioned decree lays down that the use of force by the Armed Forces against a hostile group during a state of emergency is subject to the rules of engagement, the operations being carried out in conformity with international humanitarian law;

That article 4, paragraph 4.14 of Legislative Decree No. 1136 of the Joint Command of the Armed Forces provides that the Joint Command of the Armed Forces shall, among other functions, assume the Unified Command of the Armed Forces and the National Police when the President of the Republic declares a state of emergency and places the armed forces in charge of maintaining public order, as provided for by Supreme Decree No. 007-2016-DE of 18 July 2016;

That article 1 of Supreme Decree No. 004-2013-DE of 21 June 2013 stipulates the scope of the Command in respect of military actions or operations in areas where the state of emergency has been declared, when the armed forces are responsible for maintaining public order and provides that the planning, organization, leadership and conduct of military actions or operations shall be carried out under a Unified Command, led by the respective Operational Command of the Armed Forces;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, of the Political Constitution of Peru; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to the notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, LLochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa, Province of Huanta; in the districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncco, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchihuay, Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma and Andaymarca, Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the districts of Echarate, Megantoni Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen, Province of La Convención, Department of Cusco; in the districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Rio Tambo, Province of Satipo; in the districts of Andamarca and Comas, Province of Concepción; and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca, Province of Huancayo, Department of Junín, is hereby extended for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 10 December 2016.

Article 2: Suspension of the exercise of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person, the inviolability of the home and freedom of assembly and of movement within the territory, embodied in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Maintenance of public order

The armed forces shall be responsible for maintaining public order during the state of emergency declared in article 1 hereof.

The National Police of Peru shall support the Armed Forces with a view to achieving this objective in the districts where a state of emergency has been declared.

Article 4: The action of the armed forces

The action of the armed forces shall be governed by the rules of international humanitarian law, in pursuance of Legislative Decree No. 1095.

Article 5: Unified Command

The Joint Command of the Armed Forces shall assume the Unified Command of the Armed Forces and the National Police in the districts specified in article 1 hereof, in accordance with Legislative Decree No. 1136, the Legislative Decree of the Joint Command of the Armed Forces, and Supreme Decree No. 004-2013-DE, which stipulates the scope of the Command in respect of military actions or operations in areas in which a state of emergency has been declared, in cases where the armed forces are responsible for maintaining public order.

Article 6: Endorsement

This present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 7 December 2016.

Pedro Pablo Kuczynski Godard
President of the Republic

Fernando Zavala Lombardi
President of the Council of Ministers

Jorge Nieto Montesinos
Minister of Defence

Carlos Basombrio Iglesias
Minister of the Interior
María Soledad Pérez Tello
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, 21 décembre 2016

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques (Secrétariat de l'Organisation) et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte [international] relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de l'article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, a l'honneur de l'informer que le décret suprême n° 091-2016-PCM, publié le jeudi 8 décembre 2016 et dont le texte est joint à la présente, proroge pour une durée de soixante (60) jours commençant le 10 décembre 2016 l'état d'urgence déclaré dans plusieurs districts des provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, de la province de La Convención du département de Cusco, et des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo du département de Junín.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques (Secrétariat de l'Organisation) les assurances de sa très haute considération.

Prorogation de l'état d'urgence dans plusieurs districts des provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, de la province de La Convención du département de Cusco, et des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo du département de Junín.

**DÉCRET SUPRÊME
N°091-2016-PCM**

Le Président de la République,

Considérant :

Que, par le décret suprême n° 076-2016-PCM du 6 octobre 2016, un état d'urgence de soixante (60) jours commençant le 11 octobre 2016 a été déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchiuay de la province de La Mar du département d'Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín;

Qu'alors que le délai d'application de l'état d'urgence mentionné à l'alinéa précédent vient à expiration, selon la communication N° 1222 JCCFFAA/SG du chef de l'état-major interarmées, en date du 16 novembre 2016, les circonstances ayant dicté la proclamation de l'état d'urgence dans les provinces et districts précités persistent et il y a donc lieu de le proroger afin de permettre aux forces armées péruviennes de faire le nécessaire pour favoriser l'adhésion de la population aux buts et objectifs recherchés par le Gouvernement central, à savoir la consolidation de la paix dans la zone considérée et dans le pays;

Qu'aux termes du paragraphe I de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême, les forces armées devant pourvoir au maintien de l'ordre public pendant la durée de l'état d'urgence si le Président de la République en décide ainsi;

Que le décret législatif n°1095 définit les principes, formes, conditions et limites de l'emploi de la force par les forces armées sur le territoire national, les dispositions de son article 4 stipulant que les forces armées interviennent sur le territoire national en menant des opérations militaires pour défendre l'état de droit et protéger la société afin de faire face à un groupe hostile, après déclaration de l'état d'urgence, lorsque la mission de maintien de l'ordre public est confiée aux forces armées;

Qu'aux termes de l'article 12 du même décret législatif n°1095, durant l'état d'urgence, le commandement unifié des forces armées et de la Police nationale incombe à l'état-major opérationnel pour le maintien de l'ordre public, avec la participation de la Police nationale péruvienne, et que la coordination se fait suivant les dispositions de l'état-major opérationnel;

Que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susmentionné, est considéré comme un groupe hostile tout ensemble d'individus sur le territoire national qui réunit les trois conditions suivantes : I) avoir un degré minimum d'organisation; II) avoir la capacité et la volonté d'affronter l'État de manière prolongée et au moyen d'armes à feu; et III) participer à des hostilités ou à la réalisation de celles-ci;

Qu'en conséquence, les terroristes rémanents constituent un groupe hostile chaque fois qu'ils réunissent les conditions susmentionnées;

Que le paragraphe 13.2 de l'article 13 du décret mentionné établit que l'emploi de la force contre un groupe hostile par les forces armées durant l'état d'urgence obéit aux règles d'engagement et de comportement et que les opérations se déroulent dans le respect du droit international humanitaire;

Qu'aux termes du paragraphe 4.14 de l'article 4 du décret législatif n°1136, l'état-major interarmées est chargé, entre autres fonctions, d'assurer le commandement unifié des forces armées et de la Police nationale lorsque le Président de la République décrète l'état d'urgence et confie la mission de maintien de l'ordre public aux forces armées, dispositif réglementé par le décret suprême n°007-2016-DE du 18 juillet 2016;

Qu'il résulte de l'article premier du décret suprême n° 004-2013-DE, en date du 21 juin 2013, sur le commandement des actions et opérations militaires dans les zones sous régime d'état d'urgence, que, lorsque la mission de maintien de l'ordre public est confiée aux forces armées, la planification, l'organisation, la direction et la conduite des dites actions et opérations relèvent d'un commandement unifié, confié à l'état-major opérationnel des forces armées compétent;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 de la Constitution politique du Pérou; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé;

Décète :

Article premier - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé, pour une durée de soixante (60) jours commençant le 10 décembre 2016, l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchiuay de la province de La Mar du département d'Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la

province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín;

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence visé à l'article précédent et dans les circonscriptions y mentionnées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Maintien de l'ordre public

Les forces armées assurent le maintien de l'ordre public pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article premier du présent décret suprême. La Police nationale péruvienne appuie les forces armées dans cet objectif dans les districts déclarés en état d'urgence.

Article 4 - Intervention des forces armées

L'intervention des forces armées obéit aux normes du droit international humanitaire, conformément aux dispositions du décret législatif n° 1095.

Article 5 - Commandement unifié

L'état-major interarmées assure le commandement unifié des forces armées et de la Police nationale dans les districts visés à l'article premier du présent décret suprême, conformément aux dispositions du décret législatif n° 1136 portant commandement unifié des forces armées et du décret suprême n° 004-2013-DE portant commandement des actions et opérations militaires dans les zones sous régime d'état d'urgence lorsque la mission de maintien de l'ordre public est confiée aux forces armées.

Article 6 – Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, par le Ministre de la défense, par le Ministre de l'intérieur, et par le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le sept décembre deux mille seize.

Le Président de la République
Pedro Pablo Kuczynski Godard

Le Président du Conseil des ministres
Fernando Zavala Lombardi

Le Ministre de la défense
Jorge Nieto Montesinos

Le Ministre de l'intérieur
Carlos Basombrio Iglesias

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme
María Soledad Pérez Tello

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

*Notifications deposited with the
Secretary-General of the United Nations:
27 December 2016*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
27 December 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Pérou

*Dépôt des notifications auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 27 décembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 27 décembre 2016*

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

7-1-SG/ 03

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos- y, en alcance a la nota 7-1-SG/107 del 21 de diciembre de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4º del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, así como del Artículo 27º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene a honra informar que mediante Decreto Supremo No. 093-2016-PCM, publicado el 20 de diciembre de 2016, cuya copia se acompaña, se declara por treinta (30) días, a partir de la fecha antes indicada, el Estado de Emergencia en la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 (f) del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú y en los Artículos 9º, 12º, 17º y 21º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, con el motivo de consolidar la pacificación de la zona y del país.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas hace propicia la oportunidad para reiterar a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos- las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 6 de enero de 2017

Declaran el Estado de Emergencia en la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco

**DECRETO SUPREMO
N° 093-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, mediante Oficio N° 942-2016-DGPNP/SA, el Director General de la Policía Nacional del Perú solicita al Ministro del Interior que se declare el Estado de Emergencia en la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, a fin de asegurar el control del orden público y evitar actos de violencia o cualquier ilícito penal que se pudiera cometer en dicha zona; sustentando dicho pedido en el Informe N° 018-2016-DIRNOP-PNP/FRENPOL-ESPINAR-SEC, a través del cual se informa sobre los conflictos sociales advertidos en la provincia antes mencionada;

Que, habiéndose producido actos contrarios al orden público que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, resulta necesario adoptar las medidas constitucionalmente previstas para restablecer el orden interno;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo Título II se establecen las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su función constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia
Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia en la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186 y en el Decreto Legislativo N° 1095, respectivamente.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, 21 December 2016

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in reference to note no. 7-1-SG/107 of 21 December 2016¹, in accordance with article 4 of the [International] Covenant on Civil and Political Rights and with article 27 of the Inter-American Convention on Human Rights, has the honour to inform that, by Supreme Decree No. 093-2016-PCM, issued on 20 December 2016 (copy attached), a state of emergency is declared for thirty (30) days in the Province of Chumbivilcas, Department of Cusco, with effect from the aforementioned date.

During the state of emergency, the constitutional rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, and in articles 9, 12, 17 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, will be suspended in order to consolidate peace in the area and in the country as a whole.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, the renewed assurances of its highest consideration.

¹ On 21 December 2016, the Permanent Mission of Peru to the United Nations notified the Secretary-General by note verbale No. 7-1-SG/107 of 21 December 2016 of this declaration of a state of emergency. Subsequently, the Permanent Mission transmitted a revised note verbale, No. 7-1-SG/03 of 6 January 2017, transmitted in this depositary notification.

**Declaration of a state of emergency in the Province of Chumbivilcas, Department of Cusco
Supreme Decree No. 093-2016-PCM**

The President of the Republic

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That furthermore article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, declare the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration in all or part of the national territory, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or public order, a disaster, or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, the inviolability of the home and freedom of assembly and movement in the territory may be restricted or suspended;

That by Note No. 942-2016-DGPNP/SA, the Director General of the National Police of Peru asked the Minister of the Interior to declare a state of emergency in the Province of Chumbivilcas, Department of Cusco, in order to ensure the maintenance of public order and forestall acts of violence or any criminal act which might be committed in that area; that request being based on Report No. 018-2016-DIRNOP-PNP/FRENPOL-ESPINAR-SEC on social conflicts observed in the aforementioned province;

That in view of the occurrence of events disrupting the public order and affecting the normal course of the population's activities in the Province of Chumbivilcas, Department of Cusco, it is necessary to adopt the measures envisaged in the Constitution for the restoration of public order;

That Legislative Decree No. 1186, which regulates the use of force by the National Police of Peru, clarifies the parameters for the use of force by the Police, the levels of force which may be used, the circumstances when force may be used and the rules of conduct in that event;

That Legislative Decree No. 1095 establishes the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory, insofar as Title II thereof sets forth the rules for the use of force in other violent situations, in areas in which a state of emergency has been declared and where the National Police of Peru is responsible for maintaining public order, discharging its constitutional duties by using its powers and enforcement capabilities to protect society and defend the rule of law;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, subparagraphs 2 (b) and (d) of Act No. 29158, the Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to the notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Declaration of a state of emergency

A state of emergency is hereby declared in the Province of Chumbivilcas, Department of Cusco, for a period of thirty (30) calendar days. The National Police of Peru shall maintain public order with the support of the armed forces.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to the liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of assembly and movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: The action of the National Police of Peru and of the armed forces

The National Police of Peru and the armed forces shall act in conformity with the provisions of Legislative Decree No. 1188 and Legislative Decree No. 1095, respectively.

Article 4: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of the Interior, the Minister of Defence and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 20 December 2016.

Pedro Pablo Kuczynski Godard
President of the Republic

Fernando Zavala Lombardi
President of the Council of Ministers

Jorge Nieto Montesinos
Minister of Defence

Carlos Basombrio Iglesias
Minister of the Interior

María Soledad Pérez Tello
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, 21 décembre 2016

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en référence à la note verbale no 7-1-SG/107 du 21 décembre 2016¹, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte [international] relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de l'article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, a l'honneur d'informer qu'aux termes du décret suprême no 093-2016-PCM, publié le 20 décembre 2016 et dont le texte est joint à la présente, est déclaré l'état d'urgence pour une durée de trente (30) jours à partir de la date susmentionnée, dans la province de Chumbivilcas du département de Cusco.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

¹ Le 21 décembre 2016, la Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies a notifié le Secrétaire général par note verbale N° 7-1-SG/107 du 21 décembre 2016 de la présente déclaration d'état d'urgence. Par la suite, la Mission permanente a transmis une note verbale révisée, N° 7-1-SG/03 du 6 janvier 2017, transmise dans la présente notification dépositaire.

Déclaration de l'état d'urgence dans la province de Chumbivilcas du département de Cusco

Décret suprême N° 093-2016-PCM

Le Président de la République

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation;

Que l'article 137 de la Constitution dispose que le Président de la République peut décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et à l'obligation d'en informer le Congrès ou la Commission permanente, pour une durée déterminée, sur la totalité ou sur une partie du territoire national, les régimes d'exception y visés, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre public, de catastrophe ou de situations graves troublant la vie de la nation, durant lequel peut être restreint ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire;

Que, par la communication N° 942-2016-DGPNP/SA, le Directeur général de la Police nationale péruvienne a demandé au Ministre de l'intérieur de déclarer l'état d'urgence dans la province de Chumbivilcas du département de Cusco, afin de garantir le contrôle de l'ordre public et d'éviter que des actes de violences ou autres infractions pénales ne soient commis dans la zone concernée, en appuyant sa demande sur la note d'information N° 018-2016-DIRNOP-PNP/FRENPOL-ESPINAR-SEC, dans laquelle il est rendu compte des conflits sociaux advenus dans la province susmentionnée;

Que, au vu des événements qui sont venus perturber l'ordre public et le déroulement normal des activités de la population de la province de Chumbivilcas du département de Cusco, il est nécessaire d'adopter les mesures prévues par la Constitution pour rétablir l'ordre public;

Que le décret législatif N° 1186, qui règlemente l'usage de la force par la Police nationale péruvienne, définit l'usage de la force dans l'exercice de la fonction policière, ainsi que les niveaux de l'usage de la force et les circonstances et règles de conduite relatives à l'usage de la force;

Que le décret législatif N° 1095 établit le cadre juridique règlementant les principes, formes, conditions et limites de l'emploi et de l'usage de la force par les forces armées sur le territoire national et que le Titre II dudit décret définit les règles de l'usage de la force en situations de violence, dans des zones décrétées en état d'urgence, où la Police nationale péruvienne est chargée, dans le cadre de l'accomplissement de son devoir constitutionnel, de rétablir l'ordre public en ayant recours à son potentiel et à ses capacités coercitives pour protéger la société et défendre l'état de droit;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 et au paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi N° 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif);

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé;

Décète :

Article premier - Déclaration de l'état d'urgence

Est déclaré, pour une durée de trente (30) jours calendaires, l'état d'urgence dans la province de Chumbivilcas du département de Cusco. La Police nationale péruvienne maintiendra l'ordre public avec l'aide des forces armées.

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article précédent et dans la circonscription y visée, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Intervention de la Police nationale péruvienne et des forces armées

L'intervention de la Police nationale péruvienne et des forces armées se fait conformément aux dispositions du décret législatif N° 1186 et du décret législatif N° 1095.

Article 4 – Contrescoring

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, par le Ministre de l'intérieur, par le Ministre de la défense et par la Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt décembre deux mille seize.

Le Président de la République
Pedro Pablo Kuczynski Godard

Le Président du Conseil des ministres
Fernando Zavala Lombardi

Le Ministre de la défense
Jorge Nieto Montesinos

Le Ministre de l'intérieur
Carlos Basombrio Iglesias

La Ministre de la justice et des droits de l'homme
María Soledad Pérez Tello